

---

## NEOLIBERALISMO Y DESASTRE AGROPECUARIO

*Jorge Enrique Robledo Castillo*

Coordinador Nacional de Unidad Cafetera. Secretario de la Asociación por la Salvación Agropecuaria. Profesor Titular y Maestro Universitario, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales.

---

*En este artículo el autor analiza la catastrofe del agro colombiano, compara esta situación con la existente antes de la apertura económica, examina el contexto internacional de estas políticas y refuta la argumentación neoliberal sobre la agricultura.<sup>1</sup> Deslinde*

Los problemas del sector agropecuario colombiano no empezaron con la apertura. Con anterioridad a esta política también existían sesgos en su contra, en comparación a como trataban los gobiernos de los países desarrollados a sus agricultores y ganaderos. En un país en el que no se producían tractores ni maquinaria agrícola, los aranceles a los equipos importados eran de los más altos del mundo. Tampoco había crédito abundante y barato como se requería. Los costos de los agroquímicos siempre fueron de monopolio. Los precios de sustentación, cuando y en los cultivos en que existieron, nunca satisficieron por completo las necesidades de los productores. Las redes institucionales de comercialización en general brillaban por su ausencia. Los distritos de riego, claves en la modernización agropecuaria, no tenían la extensión deseada. Y la educación, investigación y asistencia técnica especializadas estaban bien distantes de las que se disfrutaban en las potencias. En consecuencia, la modernización empresarial no tenía los niveles de los países que se hallaban en la vanguardia tecnológica y productiva y buena parte del sustento alimentario nacional se apoyaba en las débiles espaldas de un campesinado pobre o medio que, para agravar las cosas, en una proporción muy considerable laboraba en las empinadas laderas andinas.

Entre las trabas oficiales al incremento de las productividades de antes de 1990 también contó, y de qué manera, que las importaciones de productos agropecuarios constituyeron un flagelo que azotó periódicamente a los productores, siempre con el pretexto de combatir la inflación. A lo largo de este siglo también hubo aperturas en 1935, 1954, 1966 y entre 1973 y 1982, además de las numerosas importaciones puntuales que generalmente llegaron en el preciso momento en que salían las cosechas nacionales, según las denuncias de las agremiaciones del sector. Cómo olvidar que Colombia fue autosuficiente en trigo hasta 1956, año a partir del cual los gobiernos decidieron entregarle el mercado nacional a los llamados "excedentes" de los Estados Unidos, importaciones que se hicieron baratas hasta cuando lograron el cometido de desaparecer en la práctica la producción nacional.

Al agro también lo afectaba negativamente el contrabando, actividad que en Colombia siempre ha contado con la evidente complicidad de todos los gobiernos. El sesgo antiagrario de antes de la apertura aparece igualmente en el

trato dado a los caficultores, sometidos desde siempre a gravámenes discriminatorios y regresivos, exacciones que Rodrigo Marín Bernal calculó en 3.600 millones de dólares entre 1970 y 1995.

Por esa falta de garantías para producir en el campo, buena parte de su atracción a los inversionistas estuvo, más que en la producción propiamente dicha, en el incremento del precio de las tierras, valorización que justificaba sostener negocios con rentabilidades relativamente bajas a la espera de que en la venta de las fincas se hiciera una ganancia capitalizada. Por su parte, los campesinos y los indígenas sobrevivieron amparados por débiles economías de autoconsumo que se fundamentaban en la sobrexplotación de la mano de obra familiar y en su notoria pobreza.

Entonces, una de las grandes falacias sobre las que se montó la apertura consistió en señalar que el agro nacional estaba excesivamente protegido y que si no se había desarrollado más era porque los empresarios y los campesinos habían abusado del llamado "paternalismo" estatal. Pero, y a aquí el pero es del tamaño de una cordillera, también era cierto que si bien el sector no funcionaba como debía, de él derivaban su sustento campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios, quienes, además, le hacían aportes significativos al desarrollo del país.

Estando así las cosas, con un desarrollo mediocre en el agro (y también en la industria), se facilitó el ardid neoliberal de plantear que el proteccionismo había fracasado y que, por tanto, la felicidad cubriría a los colombianos si se abría el país a las importaciones foráneas y si se eliminaba o reducía hasta el mínimo el apoyo del Estado a los productores. Los conceptos "protección", "subsidio" y "respaldo" fueron proscritos porque, según decían los aperturistas, alcahueteaban la ineficiencia y la pereza de los empresarios y los campesinos y estimulaban la corrupción estatal. Para justificar la doctrina de "sálvese el que pueda" y dejar expósitos a los nacionales ante las asechanzas foráneas, también se dijo, y sin ruborizarse siquiera, que el país invadiría al mundo con sus productos.

Fue tanta y tan sistemática la ofensiva ideológica de los aperturistas, que para los que no estaban al tanto pudo parecer que sus recetas tuvieron respaldo unánime. Eran los días en que cualquiera que se declarara neoliberal disfrutaba de enjambres de micrófonos que le amplificaban sus ocurrencias y como por encanto lo convertían en sapiente estadista. La celada se completó calificando de "dinosaurios", "seres del pasado", "paternalistas", "enemigos del progreso" y hasta "cómplices de la corrupción oficial", a quienes nos opusimos al engendro, apelando al manido truco de reemplazar el análisis sobre los hechos por el ataque a las personas.

Pero a pesar de la andanada neoliberal, los opositores dejamos nuestras constancias, optimistas con el resultado que a la postre tendría el debate, porque sabíamos que el "bien venidos al futuro" de Gaviria no era más que el intento de meter como novedoso el refrito de las doctrinas que en los siglos XVIII y XIX acuñara Adam Smith, ciudadano inglés que había teorizado para servirle al imperio del cual era súbdito y con el obvio propósito de impedir que Francia, Alemania, Estados Unidos y los restantes países que podían competirle pudieran salir del atraso productivo y desarrollar economías capitalistas prósperas.

En letras de molde quedaron las advertencias de que la aplicación del modelo neoliberal conduciría la nación al matadero: así ocurrió con los muchos análisis publicados en las revistas *Deslinde* y *Agricultura Tropical* en estos nueve años y con analistas tan autorizados como Abdón Espinosa Valderrama, Jaime Carvajal Sinisterra, Fabio Echeverri Correa, Antonio Alvarez Restrepo, Samuel Hoyos Arango, Jorge Child y, especialmente, Eduardo Sarmiento Palacio, quien, por nueve años y en una valerosa columna semanal, ha desmontado uno a uno los infundios neoliberales y dejado en ridículo la supuesta sabiduría de sus más connotados voceros. Inclusive, y cuando Gaviria aun no había culminado su compraventa de conciencias, Salomón Kalmanovitz, en ese momento un simple profesor universitario, sometió al escarnio público a Rudolff Hommes, porque éste había escrito, antes de que lo nombraran ministro y refiriéndose a la apertura, que "los mercados internacionales son oligopolios más competitivos y la primera víctima de la competencia internacional sería la industria nacional"<sup>2</sup>.

Entre las muchas cosas que quedaron claras en los orígenes de la apertura estuvo la de que ella no era el producto de la genialidad de algún cerebro criollo y que se estaba ante la definitiva concreción de una emboscada que se

intentaba desde antes. Dos años antes de definirla, el 7 de noviembre de 1988, en el periódico El Tiempo, el ex ministro de hacienda Edgar Gutiérrez Castro advirtió que Colombia estaba siendo sometida "a un peligroso desmantelamiento de los controles sobre sus importaciones", por cuenta de "una política dictada por el Fondo Monetario Internacional". Por su parte, a los pocos días de aprobada la definitiva desprotección del mercado interno, Abdón Espinosa Valderrama, ministro de hacienda del gobierno de Carlos Lleras Restrepo, explicó la decisión como el producto de un chantaje y agregó que se estaba ante una estrategia ya ensayada y fracasada en Colombia. Según éste,

"El equipo económico del gobierno (de Barco) ha dado, en sus postrimerías, prueba de heroico estoicismo al guardar escrupuloso silencio sobre el origen de la mal llamada apertura de la economía colombiana. Ha preferido asumir valientemente su responsabilidad a compartirla con la institución de donde provino su exigencia como requisito sine qua non para desbloquear el otorgamiento de sus créditos.

En efecto, el Banco Mundial los tenía virtualmente suspendidos, (...). Si (el gobierno) quería obtener nuevos préstamos, siquiera equivalentes al pago de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones, o, en términos más benignos, abrir su economía...

Anteriores experimentos de liberación de importaciones, también impuestos desde afuera como supuestos requisitos de la aceleración del desarrollo, tuvieron adversos resultados: estrangulamiento exterior en 1966 y recesión económica en 1981-82"<sup>3</sup>.

También se advirtió que en el caso de los productos agropecuarios que hacían parte de la oferta de las grandes potencias, los agricultores y ganaderos colombianos no darían ni un brinco, porque en esas naciones trabajaban, entre otras ventajas, con el respaldo de unos subsidios que sumaban la enorme suma de 320 mil millones de dólares anuales, aportes que no iban a ser desmontados por la retórica del mal llamado "libre comercio", como quedó demostrado en la Ronda de Uruguay, donde Estados Unidos y sus socios en el control del Banco Mundial apenas aceptaron disminuirlos en 21 por ciento, dejándolos en 252.800 millones de dólares al año (!)<sup>4</sup>, promesa que por supuesto tampoco cumplieron. Y que ese comercio internacional de productos agrícolas y pecuarios era aun más corrupto que las muchas corruptelas nacionales que usaban los aperturistas como pretexto para dejar indefensos a los productores colombianos, lo explicó Carlos Gustavo Cano, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, cuando dijo:

"(se) sabe que el comercio internacional de dichos bienes no solo no es diáfano sino que es muy oscuro y que, bajo su turbia sombra, la supuesta corrupción de los organismos públicos que intervienen en él es apenas un pálido reflejo de la del sector privado y transnacional"<sup>5</sup>.

Otra de las afirmaciones que se hicieron anticipando la gravedad del impacto de la apertura sobre toda la nación fue la muy certera de Darío Múnera Arango, presidente de la Junta Nacional de la Andi, quién señaló:

"entonces yo llego a la tesis de que la competencia no es entre empresas sino entre naciones, naciones completas (...) en el ámbito internacional, más que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial juega la capacidad nacional de competencia"<sup>6</sup>.

Significaba con ello Múnera Arango que en el precio de cualquier mercancía que se envía por el mundo, lo principal, lo determinante, no es la voluntad de los individuos que la producen sino las circunstancias en que ellos actúan, es decir, las condiciones nacionales que les hayan permitido, o no, acumular grandes capitales y las tecnologías que de ellos se derivan, y si se benefician de maquinarias con precios razonables, de créditos abundantes y baratos, de insumos con precios bajo control, de altos niveles de educación, investigación científica y asistencia técnica, de grandes y pudientes mercados internos, de enormes obras de infraestructura, de fletes internos baratos, de subsidios abiertos y encubiertos, de barreras proteccionistas arancelarias y fitosanitarias y de las

restantes garantías que, en últimas, determinan quién vence a quién en la competencia internacional. Lo determinante del papel de las condiciones generales de la economía en el éxito o fracaso de los individuos, lo ilustra bien un ejemplo: por inteligente y fuerte que sea y por mucho que entrene un nadador, poco saca si el encargado de ponerle la temperatura al agua de la piscina la sube a cien o la baja a cero grados, así éste le monte una cantaleta acusándolo de no mover bien los brazos o de no respirar adecuadamente, como hacen los aperturistas con los productores nacionales.

Una vez se hizo el ejercicio de comparar cómo se producía en el agro de Colombia y en el de Estados Unidos, por ejemplo, quedó claro que la capacidad nacional de competencia de los colombianos era bastante menor, y no solo porque los subsidios de esa potencia a su sector agropecuario sumaban unos 80 mil millones de dólares al año. Cuando la apertura empezó, toda la producción se hacía allá con equipos de significativo poder y, con frecuencia, por auténticos monopolios que controlaban capitales e inversiones inmensas, porque no existía la producción campesina, entendida ésta como la que hacen quienes carecen de manera absoluta de un capital o lo tienen de muy escaso monto y deben entonces laborar con sus manos y las de su familias, sin contratar mano de obra asalariada o en muy poca cantidad, y sin el empleo de maquinarias que les aumenten la productividad de su trabajo. También se señaló que los precios de sustentación norteamericanos eran tan efectivos que hasta habían permitido garantizarles el ingreso a los agricultores para que no sembraran o pagarles, por cuenta del Estado, el sacrificio de millares de vacunos y el derrame de millones de litros de leche, para impedir superproducciones consideradas indeseables. Eran tan notorias las diferencias en las tasas de interés de los créditos, que no es del todo exagerado decir que allá los productores pagaban por el dinero en un año lo que aquí se les cobraba en un mes. En tanto aquí el riego apenas respaldaba una porción pequeña del área sembrada, allá era prácticamente omnipresente, gracias a que desde la década de 1930 el Estado había hecho por su cuenta grandes inversiones en represas y canales. Mientras en esas tierras los fletes se abarataban por el común empleo de ríos y ferrocarriles como sistemas de comunicación, en éstas casi todo se cargaba por carretera, el sistema de transporte más costoso que existe después del aéreo. En tanto allá existía una formidable red de universidades públicas gratuitas y multitud de centros de investigación financiados por el gobierno, que ponían a disposición de los productores especialistas a porrillo y casi que a diario semillas mejoradas y avanzados recursos para controlar las plagas, aquí apenas había unas pocas facultades de agronomía y veterinaria signadas por la escasez de recursos, y los institutos de investigación, mal dotados y financiados, eran la excepción y no la norma, a pesar de que en los países de las zonas templadas los gélidos inviernos se encargan de hacer fuertes controles fitosanitarios cada año, mientras que en las regiones tropicales las plagas se reproducen y mutan con extraordinaria rapidez, realidad que genera diferencias naturales enormes y de grandes consecuencias a la hora de producir. Para completar el cuadro de las desemejanzas, allá solo se producía en tierras planas y aquí buena parte de la agricultura y la ganadería se hacía en las montañas, donde ni siquiera era posible beneficiarse de muchas de las posibilidades que ofrece el empleo de la rueda. En resumen, a cada agricultor y ganadero norteamericano lo llevaban de la mano el Estado y la capacidad nacional de competencia que los gobiernos habían creado y mantenían, cuando en Colombia ocurría todo lo contrario. Y las garantías en Europa y Japón eran aún mayores.

Las diferencias anotadas entre las capacidades nacionales de competencia son las que en últimas explican las grandes distancias entre las respectivas productividades del trabajo, el indicador que por excelencia marca los niveles de tecnificación de las faenas y de desarrollo de las naciones. En el caso del arroz, por ejemplo, los trabajadores norteamericanos tienen una productividad 4.6 veces mayor que la de los colombianos<sup>7</sup>, así las producciones del cultivo por hectáreas sean similares.

También se explicó que si todos los gobiernos de todas las potencias protegían sin escrúpulos a su agro, no lo hacían porque sufrieran de una particular estupidez que los indujera a convertir en perezosos a sus pueblos –como podría deducir algún neoliberal ignorante–, sino en razón de las conveniencias de sus monopolios y del conjunto de sus naciones. Porque en el capitalismo el agro termina por desaparecer sin la debida protección del Estado, porque los menores precios de los alimentos disminuyen el precio de la mano de obra y, por esa vía, de todas las mercancías, porque los consumos de la producción agropecuaria jalonan la industria y el resto de la economía,

porque las exportaciones de productos agrícolas constituyen una parte vital de sus comercios exteriores, hasta el punto que en 1995 las norteamericanas superaron los 50 mil millones de dólares, y, por sobre todo, porque país que no garantice la seguridad alimentaria de su pueblo perderá su soberanía nacional y será indefectiblemente sometido a lo que le quieran imponer los que le vendan y controlen su comida, y especialmente los cereales, el alimento estratégico por excelencia.

Sin lugar a dudas, en la campaña neoliberal tendiente a convencer a los colombianos de que la soberanía nacional ha caducado en la era de la «globalización», también cuenta que así se prepara el terreno ideológico para eliminar o reducir hasta la insignificancia la producción cerealera, sin que se generen protestas proporcionales al tamaño del atentado. Así se entiende porqué la ministra de agricultura de Samper, cuando le preguntaron qué opinaba acerca de que las importaciones de maíz hubieran pasado de 17 mil a 1.7 millones de toneladas a partir de 1990, tuvo el descaro de responder:

"Colombia tiene que entender que no puede ser un país competitivo en producción de cereales"<sup>8</sup>,

afirmación que si se hubiera hecho en cualquiera de los países desarrollados que los aperturistas criollos dicen imitar, habría provocado la destitución fulminante de la funcionaria o la caída del gobierno.

Lo otro que se aclaró fue por qué el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los cancerberos de los intereses de los monopolistas norteamericanos y de las restantes potencias, decidieron pisar el acelerador de la política aperturista precisamente en ese momento. Según Lester Turow, decano de la escuela de administración del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT):

"tome cualquier producto, sume la capacidad mundial para producirlo, calcule a cuanto habrá de comprarlo el mundo, y habrá cuanto menos un 30 por ciento de exceso de capacidad de producción"<sup>9</sup>.

Y para el caso del agro, Turow detalló:

"el mundo sencillamente puede producir más que lo que necesitan comer los que tienen dinero para pagar. Ningún gobierno firmará un acuerdo que obligue a un elevado número de sus agricultores y a una gran extensión de sus tierras a retirarse de la agricultura"<sup>10</sup>,

con lo que dejó claro que la humanidad padece por una de las clásicas crisis de superproducción que periódicamente azotan a las economías de mercado, que la apertura busca sacar tierras, agricultores y ganaderos del negocio agropecuario como solución a ese exceso de capacidad productiva y que cuando habla de "ningún gobierno" no se refiere a los de Barco, Gaviria, Samper y Pastrana, sino a los de Estados Unidos y de las restantes potencias.

La ruina de millones de productores urbanos y rurales en todo el mundo no es, entonces, una consecuencia impensada de las orientaciones neoliberales, sino su principal propósito. Si en esta etapa los monopolistas y en general los empresarios de los países desarrollados no logran eliminar competidores en todo el orbe, la política habría fracasado. Es obvio que la idea de crear mercados de envergadura global presupone la consolidación de capitales de esa misma amplitud, es decir, de carácter monopólico y transnacional, los únicos capaces de actuar en cada rincón de la tierra, y presupone, también, la tendencia al desaparecimiento de todas las formas económicas no monopolistas, bien sean empresariales y, naturalmente, campesinas. Entonces, otra de las mentiras de la época consiste en decir que la apertura estimula la competencia entre todos los productores, como si fuera posible que ella se diera haciendo caso omiso del tamaño de los competidores, razón que explica porqué en el deporte, la actividad humana competitiva por excelencia, se compite pero dentro de categorías precisamente establecidas. Sin duda alguna, el público reclamaría indignado contra un promotor de boxeo que metiera en el mismo ring a un peso pesado y a un peso pluma, así a éste lo hubiera tramado dictándole varios cursos para mejorarle su autoestima.

Que por diversas razones que no es del caso detallar aquí, en Estados Unidos, Japón y Europa exista una política que se empeña en mantener con vida a sectores de productores no monopolistas en su agro, no debe entenderse como que éstos, y los del resto del mundo que logren sobrevivir, quedarán exentos de tributarle al gran capital transnacional. Aun si a esos productores se les permitiera mantenerse en el negocio indefinidamente, jugando el papel de concentrar parte de la producción alimentaria del mundo, serán cada vez más una especie de siervos de los monopolios de agroquímicos, de semillas y comerciales. Que se trata de empresas que poseen poderes cada vez más descomunales y que actúan en los más diversos campos, como corresponde con la época de la definitiva consolidación del capital financiero como el amo y señor del capitalismo, lo muestra bien el caso de Cargill, conglomerado que tuvo ingresos por 60 mil millones de dólares en 1996 y que controla el 25 por ciento de las exportaciones de grano, un quinto del procesamiento de maíz y un cuarto del triturado de semillas oleaginosas de Estados Unidos, país donde también posee trescientos elevadores de grano. La diversidad de intereses de Cargill, que tiene 79.000 empleados, activos en 65 países y comercia con 100, incluido Colombia donde compra café, se entiende mejor cuando se sabe que

"produce casi la mitad del jugo de naranja que se consume en Moscú. Desarrolla una semilla de maíz en Pakistán, para alimentar los pollos que sacrifica en Tailandia y se consumen en Japón»<sup>11</sup>

El corolario de estas políticas de concentración de la riqueza podría ser la adquisición de las mejores tierras de todos los países que lo permitan por parte de las transnacionales de los imperios, en todo de acuerdo con el acaparamiento que ya se observa en las finanzas, la industria y el comercio. Lo ocurrido en Argentina, donde el área comprada por dos inversionistas, uno norteamericano y otro europeo, suma más de medio millón de hectáreas, alerta lo que podría terminar ocurriendo en Colombia y en todas partes.

Además, era previsible que países distintos a los desarrollados también pusieran en aprietos la producción nacional, como sucede con el Ecuador, pues dado su menor desarrollo relativo poseen costos de mano de obra substancialmente inferiores a los colombianos. Eso es lo que ocurre con Tailandia, país que en el arroz tiene una productividad del trabajo 21 veces inferior a la colombiana<sup>12</sup> y, sin embargo, es el primer exportador del mundo.

Y que no digan los neoliberales que no se les advirtió que las licencias de importación de la apertura le darían "patente de corso" al contrabando, forma de corrupción que, además, se facilitó con las primeras determinaciones legales del gavirato; o que no era obvio que los acuerdos subregionales podían servir para triangular importaciones norteamericanas o de cualquier otra parte, como en efecto ha ocurrido.

La tesis neoliberal de que el agro colombiano debía dedicarse exclusivamente a los productos tropicales de exportación, porque en ellos las ventajas del clima liberaban al país de tener que competir con los productos de las zonas templadas de Europa, Estados Unidos y del hemisferio sur, también fue rebatida. Y lo fue porque era apenas natural que más de medio centenar de países pobres dedicados a sembrar lo mismo agravarían la tendencia a la superproducción de esos cultivos y la caída de los precios, experiencia ya comprobada en el banano y el café; porque carecía de sentido común emplear las posibles exportaciones de pitayas, por ejemplo, como pretexto para justificar las importaciones de maíz; y porque en esos productos de exportación los cultivadores nacionales terminan por dejar de ser campesinos y empresarios libres para convertirse en una especie de peones de las transnacionales que monopolizan la comercialización internacional, como gráficamente lo explicara un bananero del Magdalena. Por otro lado, este disparate teórico genera una nueva amenaza, en estos días en que la ingeniería genética abre posibilidades hasta hace poco insospechadas: si en el futuro la manipulación de los genes de las plantas permitiera sembrar banano en la Florida, café en Alemania y los demás cultivos tropicales en cualquier parte donde el clima hoy no lo permite, ¿la nación colombiana también deberá resignarse a abandonar lo que le han autorizado producir las potencias en esta etapa y aceptar que sus tierras solo sirvan para cargar rastrojos? ¿Será a

esto a lo que aspiran las concepciones más agresivas del imperialismo ambientalista, las cuales buscan crear en el orbe zonas "pulmones" que descontaminen lo que contaminan las potencias?

Por lo demás, la preocupación anotada atrás de que las transnacionales vienen hasta por la producción agropecuaria, incluida la de los cultivos tropicales, ya tiene base material en Colombia. Fuera de desalojar de buena parte de la comercialización del banano de Urabá a las empresas nacionales, las compañías extranjeras han incursionado en la producción bananera de esa región, donde ya poseen más de seis mil hectáreas. Lo más reciente al respecto es que Dole ya adquirió tres de las principales empresas que cultivan flores en la sabana de Bogotá, compra que no por casualidad coincidió con la decisión norteamericana de cesar en las acusaciones de dumping en las Cortes de ese país en contra de las exportaciones colombianas.

Obviamente, también se resaltó que la apertura llevaría a un rotundo descalabro por otra razón, además de las ya anotadas: la existencia de una pavorosa violencia que se ha enseñoreado particularmente del campo y que, por supuesto, hace bien difícil, cuando no imposible, atender como se debieran la agricultura y la ganadería.

A pesar del conocimiento de estas verdades, las cuales se encuentran todas en los textos elementales de economía, los neoliberales empotrados en el poder decidieron aplicar la totalidad de unas recetas en las que apenas jugaron el melancólico papel de traducirlas del inglés, solo que tuvieron que hacerlo con un inconveniente: quedaron impedidos para defenderse alegando que nadie les había anunciado lo que sucedería, aun cuando la verdad es que hicieron todo lo que tuvieron a su alcance para conseguir la unanimidad del pensamiento, mediante la oferta de puestos, prebendas y contratos y el empleo de amenazas, exclusiones y castigos.

Luego de los análisis reseñados, no había que ser adivino para prever cuál sería el resultado de la introducción del llamado «mercado libre» en el comercio internacional del café, de la baja de los aranceles a los productos agropecuarios importados y de la eliminación o el debilitamiento del respaldo estatal al agro nacional. ¿Y qué ocurrió? ¿Progresaron la agricultura y la ganadería? ¿Creció la riqueza y el empleo? ¿Se redujeron la pobreza y la miseria? ¿Hubo un salto hacia el futuro o Colombia cayó como una piedra hacia el pasado?

Entre 1992 y 1999 desaparecieron cerca de seis millones de sacos de café de la cosecha nacional, los cafetales que superaron la edad crítica pasan del 40 por ciento del total y se agudizó la pauperización de los cafeteros: el 95 por ciento sobrevive con cafetales de menos de cinco hectáreas, el 88 por ciento con menos de tres y el 60 por ciento con menos de una, situación que el editorial de La República del 11 de diciembre de 1997 resumió como que «se avanza en un acelerado proceso de proletarización» del sector. Si las cosas no son peores, fue porque con la lucha de los agricultores, en la que ocupó papel importante la orientación de Unidad Cafetera, se consiguió la condonación total de cerca de cien mil deudas bancarias anteriores a 1994.

La situación de los otros renglones es, si se quiere, más grave. Los cultivos transitorios disminuyeron en 800 mil hectáreas y la participación del agro en el Producto Interno Bruto se redujo en casi cuatro puntos, una pérdida enorme si se tiene en cuenta que se trata de un indicador macroeconómico y que los productos de pancoger le ayudan a las cifras porque son muy resistentes a la ruina, dada la proverbial capacidad campesina para apretarse el cinturón. Prácticamente desaparecieron el algodón, el maíz, la cebada, el sorgo y la soya, en tanto que disminuyeron el arroz, el tabaco, y tantos más. Las rentabilidades, claves porque de ellas depende el futuro de los productos, han caído en picada en los sectores sobrevivientes, como lo ilustra el caso de la ganadería, otrora símbolo de prosperidad. Y son decenas de miles los agricultores y ganaderos atrapados por créditos impagables, que amenazan con despojarlos hasta de la propiedad de las fincas y parcelas, en tanto los bancos no aceptan los predios rurales como garantías hipotecarias. De ahí que no tenga nada de extraño que 72 de cada 100 habitantes en las zonas rurales ya no sean pobres sino miserables, pues aparecen por debajo de la "línea de pobreza" que define el gobierno.

Cada una de las causas del desastre es conocida. Utilizando una supuesta lucha contra la corrupción como el pretexto favorito para justificar cualquier atentado contra los colombianos, se eliminaron o debilitaron las medidas e instituciones que en algo respaldaban el agro. Así se liquidó el Idema y con él los precios de sustentación que algún control ejercían sobre las maniobras de los intermediarios; las tasas de interés de los créditos para el sector se igualaron con las comerciales y éstas se llevaron a niveles confiscatorios; el precio de los insumos se dejó al arbitrio de los monopolios de agroquímicos; a la Caja Agraria se le redujeron sus recursos hasta anquilarla, primero, y liquidarla, luego; la investigación se redujo a casi nada y se le quiere entregar la responsabilidad de hacerla a las débiles agremiaciones de los productores y las tarifas de los servicios públicos y los impuestos se escalaron para poder auspiciar las privatizaciones y compensar las bajas de los aranceles a las importaciones.

Como era de esperarse, los productos de exportación no se salvaron de la crisis, colocando nuevamente al desnudo la estulticia neoliberal, la cual los propuso, y con cinismo lo sigue haciendo, como la salida del sector. El café, además de sufrir por las mismas razones del resto del agro, fue la primera víctima de las concepciones neoliberales. El rompimiento del Pacto que le ordenaba su comercio internacional le entregó a las transnacionales la libertad de esquilmar sin contemplaciones a los productores, mediante el establecimiento de precios de compra tan bajos que alcanzaron a ser de casi un tercio de los vigentes antes del rompimiento. A su vez, los bananeros han sufrido por los precios de monopolio y por los pleitos entre las comercializadoras europeas y norteamericanas, y el Banco Mundial ya anunció que el exceso de producción y la disminución de los consumos deberá deprimir aún más las cotizaciones internacionales de los productos tropicales, hasta el punto que en la próxima década las de café y del aceite de palma africana serían inferiores en un 30 y 40 por ciento, respectivamente.

Pero lo que definitivamente desquició el agro nacional fueron las fuertes reducciones de los aranceles a las importaciones agropecuarias, por lo que éstas pasaron de 700 mil toneladas –que ya era mucho– a siete millones de toneladas, en una política que tiene a los colombianos comprando de todo en el extranjero: trigo y maíz, arroz y soya, carne de res, de cerdo y de pollo, leche y huevos, yuca y plátano, aguacates y sapotes, manzanas y naranjas, ajos y cebollas, sin excluir hasta las hojas en las que se envuelven los tamales, con lo cual no solo se reemplaza la producción interna sino que se debilitan los precios de venta de los productos nacionales que no desaparecen. Inclusive, la Nestlé importa café soluble y se sabe que en las conversaciones con el Mercosur y en la nueva ronda de la Organización Mundial del Comercio están sobre el tapete la apertura en azúcar y café verde –únicos productos agrícolas que no pueden importarse al país–, importaciones que destrozarían a los caficultores colombianos, quienes producen con costos superiores a los brasileños, en tanto que las de azúcar borrarían del mapa la producción azucarera y podrían liquidar de carambola la caña panelera y setenta mil pequeños y medianos trapiches artesanales, si los grandes ingenios vallecaucanos se transforman en productores de panela, camino que ya parece han iniciado con su decisión de montar un entable panelero de 30 mil millones de pesos en el departamento del Cauca.

Estas importaciones se facilitaron por otro de los engendros neoliberales: una notable disminución en el control del precio del dólar, la cual le facilitó a los especuladores nacionales y extranjeros actuar a su antojo y en contra del interés nacional, política que revaluó el peso y generó la casi increíble situación de golpear, al mismo tiempo, a los que producían para la exportación y a los que producían para el mercado interno. En la revaluación de la moneda también contó el haber pasado la deuda externa de 15 mil a 34 mil millones de dólares en solo ocho años, con el propósito de reemplazar por préstamos la destrucción del trabajo nacional, adicción al crédito que, a su vez, impulsó hacia arriba las tasas internas de interés, como una forma de atraer capitales especulativos a un país que está quebrado, como todo el mundo en el exterior lo sabe.

Para completar el cuadro, el desastre del agro nacional también se agravó porque su propio hundimiento, y el de la industria y el del resto de la economía, llevaron el desempleo y la caída de los consumos a niveles nunca vistos en el país, por lo que los sectores que sobreagían no encuentran a quien venderle sus productos. Ni siquiera de la reducción de la inflación pueden vanagloriarse los neoliberales, pues ésta no es el fruto del desarrollo y el progreso sino de todo lo contrario. Mucho de lo que se está ofreciendo a menosprecio, incluidos los alimentos, contiene el



germen de la ruina que acompaña a quienes venden a pérdida. A las causas de la debacle del sector agropecuario colombiano solo resta sumarle el rotundo fracaso de las políticas neoliberales como medio para resolver los problemas de la economía mundial, pues es notorio que la caída de los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales también tiene que ver con las quiebras de países de todos los continentes y con la cada vez más notoria incapacidad de Estados Unidos para actuar como locomotora del mundo, haciendo de gran consumidor de última instancia, para no mencionar lo que ocurrirá si se produce el muy probable colapso de la burbuja especulativa que sustenta la glotonería de las capas medias y altas de ese país.

Pero en honor a la verdad hay que decir que este desastre lo encontró Pastrana, a quien hasta el 7 de agosto pasado apenas se lo podía sindicarse por haber sido de los más conspicuos gaviristas del país y por no haberle censurado a Samper su decisión de continuar con las políticas de apertura y privatización de su antecesor.

No obstante, a quienes escucharon y leyeron con la debida atención al ganador de las elecciones cuando todavía era candidato, les quedó claro que "el cambio" que ofrecía no pasaría de ser el consabido de la rosca que se apoltrona en los altos despachos oficiales. Así se hubiera ganado unos votos con frases demagógicas como aquella de que en su gobierno la bandeja paisa se volvería a hacer con productos nacionales, lo cierto es que la jerga neoliberal de "globalización", "eficiencia", "competitividad" y demás eufemismos usados para ocultar el propósito de entregarle el mercado nacional a los intereses foráneos, siempre calificó sus afirmaciones.

Una vez al mando, hasta sus más fervorosos adherentes electorales han tenido que admitir que Pastrana anda en más de lo mismo: completarle doce años a Gaviria o, si se quiere, ocho a Samper. Su Plan de Desarrollo, a pesar de utilizar las mismas cifras indicadoras del desastre que se emplean en este texto, no dice una palabra sobre echar atrás el modelo neoliberal e insiste en que la prosperidad del agro descansará en los productos de exportación, en dejar a los restantes sometidos a la dolorosa suerte que les impone la apertura y en acabar de desmontar la institucionalidad agropecuaria que aún queda.

Por si hubiera dudas, ahí están los hechos: nada de precios de sustentación, menos de créditos baratos, ninguna solución a los problemas de deudas, IVA a los insumos agrícolas, protección a los abusos de los monopolios de agroquímicos, alzas en las tarifas de los servicios públicos y la gasolina, sepultura de la Caja Agraria, la toma de 398 mil millones de pesos del Fondo Nacional del Café, que es la plata del precio interno del grano, para el «rescate» del Bancafé y, especialmente, continuar con la importación masiva de productos agropecuarios, como lo muestra de sobra la autorización para importar 150 mil toneladas de arroz y una nueva disminución de los aranceles a las importaciones de maíz. Y ahí está, por sobre todo, la determinación pastranista de someter el país de una vez por todas a los usos del Fondo Monetario Internacional, órdenes que, como se sabe, exigen profundizar en la apertura y la privatización y en el fallido intento de reemplazar con deuda externa condicionada y usurera la riqueza que las víctimas del modelo neoliberal ya no pueden producir, así la normal impudicia de quienes ferian la soberanía nacional de Colombia intente presentar el fracaso implícito en los acuerdos con los banqueros norteamericanos como un gran éxito de sus políticas y al FMI como una institución que «ya no es el ogro que era antes».

El caso de las importaciones de arroz ilustra bien la realidad de la producción agropecuaria nacional y las orientaciones de extinción a las que la tiene sometida la práctica aperturista. Esas compras se autorizaron a pesar de que Colombia es autosuficiente en ese cereal y que la productividad promedio del cultivo de los arroceros colombianos es la primera entre los países tropicales y está cerca del nivel de la de Estados Unidos, a la cual iguala o supera en el caso de los productores más tecnificados; aun cuando se produce sin el respaldo de otros cultivos que permitan rotar las tierras y en muchos casos sin el beneficio de los distritos de riego; no obstante que el subsidio promedio al arroz en los países de la OCED llega al 80 por ciento y que hay casos como el de Japón donde los productores reciben un pago seis veces superior a la cotización del grano en el mercado mundial; sin importar que por lo menos una porción considerable del arroz despachado por los comerciantes ecuatorianos sea simple triangulación de cereal norteamericano y que el arroz sea el último pilar de la seguridad alimentaria nacional;

haciendo caso omiso de que las importaciones y el contrabando de 1998 tienen a los cultivadores colombianos en una crisis que puede arruinarlos y que si ello ocurre quedarán sin trabajo 21 mil familias de productores y se perderá el equivalente a 175 mil jornales permanentes; que sufrirán consecuencias negativas todas las actividades económicas de un importante número de municipios de Tolima, Meta, Huila, Casanare, Norte de Santander, Valle y la Costa Atlántica y que si ese cultivo desaparece no habrá qué hacer con las tierras que hoy utiliza. Y, además, sin considerar que su ruina podría arrastrar la de la industria molinera, pues sería extraño que los países exportadores siguieran pagándole fletes internacionales a la cascarilla del arroz y no se dieran el gusto de emplear a fondo sus molinos, enviándonos arroz blanco ya empacado e inclusive precocido.

En términos comerciales acabar con el cultivo del arroz no tiene misterio, como ya se vio con el algodón. Ni siquiera se requiere reemplazar con importaciones y de un día para otro toda la producción nacional. Basta con que el grano importado reduzca los precios de compra del nacional hasta el punto de que a los agricultores no les quede alternativa distinta que tomar la decisión de no sembrar, para que el gobierno quede políticamente autorizado para abastecer con importaciones lo que requiera el consumo del país.

A los que les puedan parecer muy severas estas advertencias, hay que recordarles que en la apertura hasta las peores pesadillas se han convertido en realidad y contarles las declaraciones de Linda Kotschwar, ponente por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en el XIII Congreso Internacional de Induarroz, en octubre de 1998, quien refiriéndose a las exportaciones de arroz de su país, dijo:

"En 1997/98 América Latina se ha convertido en un mercado muy importante, específicamente Colombia y Ecuador (...) También es factible  
–agregó– que Colombia se convierta en un mercado regular para el arroz norteamericano"<sup>13</sup>.

Esta amenaza tampoco suena exagerada si se sabe que el mercado mundial arrocero es todavía muy pequeño, porque lo corriente es que casi todas las naciones sean autosuficientes y apenas se exporten excedentes temporales, lo que podría estimular el diseño de una estrategia tendiente a concentrar su producción en unos cuantos países y a entregarle a las transnacionales del comercio agrícola del mundo la intermediación de esos grandes volúmenes, tal y como ocurre con el trigo, el maíz, la cebada y en general con todos los cereales.

Para acabar de complicar las cosas en el arroz y en todo el agro, la apertura no ha concluido. Apenas va en la primera etapa. Los aranceles deben bajar más, de acuerdo con lo diseñado por la banca internacional y el gobierno norteamericano, que insisten en hacer un solo gran mercado desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, orientación en la que los acuerdos subregionales, como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), apenas tienen como fin servirle de mascarones de proa al gran imperio que viene detrás. Y el actual gobierno ha ratificado, en la teoría y en la práctica, que continuará con esta política de destrucción del ahorro y del trabajo nacionales.

El pensamiento del neoliberalismo colombiano sobre el tema lo expresó con cierta franqueza el funcionario del Banco de la República, Carlos Felipe Jaramillo, en el mismo congreso de Induarroz. Allí dijo:

«En las negociaciones internacionales el tema del arroz y del azúcar siempre genera discordia y rechazo entre nuestros socios. Se suele preguntar: ¿por qué Colombia protege estos dos cultivos? ¿Qué tienen de especial esos cultivos? ¿Qué es lo que están escondiendo? Si las protecciones fueran relativamente bajas, de niveles de 10%, 15% o 20%, se podría argumentar que esos niveles son normales y se generarían menos presiones. El problema es que el arroz y el azúcar son los únicos cultivos con niveles de protección del 60% y 70%»,

al tiempo que ocultó que la «protección» de la que habla no tiene origen en los estímulos que reciben los arroceros colombianos sino los extranjeros. Y agregó:

«participé en las negociaciones del GATT y en la formación de la OMC. Conozco la naturaleza de estas discusiones y debo advertirles que el arroz en estos momentos se encuentra en una situación vulnerable. Durante la nueva ronda de negociaciones del GATT que se inicia en 1999, a Colombia le van a reclamar por la protección elevada del arroz. Esto también ocurrirá en las negociaciones de una zona de libre comercio de las Américas»<sup>14</sup>.

La situación de los agricultores y ganaderos colombianos se parece a la del sapo que se echa en una olla de agua fría y flota complacido. Y al prenderse el fogón y subir la temperatura, lejos de advertir el peligro y saltar, se acomoda aún más, porque mientras más se calienta el agua más se relaja amodorrado. Y así, poco a poco y más y más, hasta que se sancocha y se muere. Pero que eso sí, se muere «contento».

Cuando los neoliberales han desnudado su verdadera naturaleza y han anunciado que los tiene sin cuidado que sus teorías no funcionen y que las seguirán aplicando aun cuando no cuenten con el respaldo de la nación, porque les basta y les sobra con la bendición del imperio norteamericano, con el aplauso de los contados nacionales que se lucran de la hecatombe y con los beneficios personales que se derivan de dirigir el Estado y de ingresar a las burocracias de las agencias internacionales de crédito, los colombianos y en particular las gentes del agro no tienen sino dos opciones. O resignarse a la manifiesta arbitrariedad con que los tratan y desentenderse de las consecuencias personales y nacionales de lo que ocurre, aceptando esos lavados cerebrales tan en boga que venden como muy sabio convertir la cobardía en una virtud y que enseñan «cómo morir de hambre y ser feliz», u oponerse a que sus vidas y la de la nación acaben por perderse en un infierno de destrucción productiva, desempleo y miseria, que hará que Colombia se parezca cada vez más al continente africano.

Lo que hay que conseguir no es nada excesivo y ya lo ha planteado en su programa la Asociación por la Salvación Agropecuaria, la novel organización que encabezó durante 1999 las más amplias, masivas y esclarecidas luchas que el sector haya dado en muchos años. Que la agricultura y la producción pecuaria cuenten con las mismas garantías con que cuentan en los países soberanos donde tienen éxito, es decir, con precios de sustentación remunerativos y estables y garantizados por el Estado, créditos suficientes, oportunos y baratos y definitiva solución a los problemas de las deudas que ya existen, control a los costos de los insumos, tarifas e impuestos, activo papel del Estado en respaldo a la financiación, comercialización, investigación, asistencia técnica, infraestructura y demás necesidades del agro, debida atención a los asuntos particulares de las regiones y productos y, especialmente, definición de una política que desestime las importaciones y que defina como de máxima prioridad conseguir el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria nacional.

En la medida en que se logre el gran acuerdo nacional en torno al programa que propone Salvación Agropecuaria, el cual ni siquiera de manera remota amenaza los intereses de ningún propietario del campo y en el que caben agricultores y productores pecuarios, y campesinos, indígenas y empresarios, al otro aspecto al que hay que atender es al de la creación de mecanismos organizativos y de reclamo que permitan generar el gran movimiento gremial y social que se requiere para poder detener y reversar el modelo económico de desmantelamiento agropecuario que se padece. Para tal efecto, es obvio que en la unidad deben caber todas las agremiaciones del sector, sin excepción alguna, y todos los productores individualmente tomados sin importar filiaciones políticas ni de ningún otro tipo, siempre y cuando también acepten que los mecanismos de presión que se empleen no podrán rebasar los marcos de las conocidas normas de la democracia y la civilización.

A los colombianos de finales del siglo XX la historia nos impuso una dura prueba: la de ser capaces de dejarle una patria mejor a nuestros descendientes, principal deber de un ser humano en su paso por la tierra, o ser inferiores a ella y, aún peor, ni siquiera intentarlo. La actividad de la inteligencia, que le otorga la razón a los patriotas que luchamos en defensa del cabal ejercicio de la soberanía nacional, el requisito indispensable del desarrollo del país, y el reconocido valor del pueblo colombiano autorizan a pensar que no todo está perdido y que la victoria será nuestra. Hagamos votos porque con nuestros esfuerzos así sea.

<sup>1</sup> Texto con base en la ponencia presentada en el Foro «El impacto de la apertura en el sector agropecuario», organizado por la Asociación por la Salvación Agropecuaria el 8 de junio de 1999 en Ibagué.

2 Citado por Kalmanovitz, Salomón, *El Espectador*, 9 de septiembre de 1990, p. 5B.

3 Espinosa Valderrama, Abdón, «La mal llamada apertura», *El Tiempo*, 27 de febrero de 1990, p. 5A.

4 *El Espectador*, diciembre 9 de 1993, p. 7B.

5 "Preferimos el monopolio estatal al privado: SAC", *El Tiempo*, septiembre 20 de 1990, p. 12A.

6 Múnera Arango, Darío, *Revista Andí*, N° 102, p.15. Subrayado en este texto.

7 El rendimiento en kilos de arroz por cada 10 horas de trabajo y por hectárea es de 3.526 en Estados Unidos y de 757 en Colombia. *Revista Induarroz*, marzo de 1999, p. 53. No confundir este indicador con el de la productividad de arroz por hectárea, el cual se comentará adelante.

8 *El Tiempo*, 1° de noviembre de 1977.

9 Thurow, Lester, *El Tiempo*, 14 de febrero de 1993.

10 Thurow, Lester, *La guerra del siglo XXI*, p.73, Vergara, Buenos Aires, 1992.

11 *El Tiempo*, 7 de enero de 1997, p. 4B, separata *The Wall Street Journal Americas*.

12 El rendimiento en arroz en kilos por cada 10 horas de trabajo y por hectárea de Tailandia es de 36. *Revista Induarroz*, marzo de 1999, p. 53.

13 *Revista Induarroz*, Op Cit. Subrayado en este texto.

14 *Ibid.*, p. 70.